

Conclusiones

A través de estas páginas recorrimos doscientos años de historia de los trabajadores tucumanos. Las huellas que estos actores dejaron –en documentos oficiales, fuentes privadas, periódicos, estadísticas y en la memoria colectiva que nos llega hasta hoy a través de testimonios orales– permitieron que los historiadores conociéramos cómo vivieron, cómo se organizaron, cómo vivenciaron y articularon sus intereses comunes e identificaron intereses opuestos, durante las diferentes coyunturas socio-económicas y políticas por las que atravesó la provincia a lo largo de este periodo.

La primera mitad del siglo XIX, específicamente entre 1810 y 1870, es decir, hasta el despuntar del auge azucarero, un amplio segmento de la sociedad tucumana ya se había proletarizado, es decir, vendía su fuerza de trabajo por un salario. El avance de las formas de trabajo masculinas asalariadas fueron la respuesta de un alto porcentaje de pequeños criadores y labradores independientes ante la nueva coyuntura económica, marcada por las guerras de la independencia, la ruptura del eje comercial Potosí-Buenos Aires, el incipiente avance de un mercado nacional y los primeros pasos del desarrollo agroindustrial azucarero. Sin embargo, el trabajo libre convivió hasta fines del siglo XIX con el conchabo y, en algunos departamentos de la provincia, la preeminencia de individuos dedicados a la agricultura y la ganadería persistió. Por su parte, la inserción laboral de la mujer se concentró, mayoritariamente, en el servicio doméstico y progresivamente en la manufactura textil (tejido y confección). En términos de organización y protesta, durante estas décadas –a excepción de los artesanos que se encontraban agremiados– no se registraron acciones de carácter colectivo. Sin embargo, la capacidad de agencia de estos actores se articuló por la vía legal (reclamos al gobierno, presentaciones judiciales) y también asumió otras formas (asesinato de patrones, fugas, robos, insultos, lesiones).

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX se produjo un cambio notable en la estructura ocupacional. En la ciudad capital crecieron los oficios artesanales, los empleados de comercio, del transporte y del servicio doméstico. Asimismo, en el área rural se forjó otro universo laboral modelado por la presencia de los ingenios que requerían de gran cantidad de peones para el trabajo de fábrica y para las tareas de cultivo, cosecha y acarreamiento de materia prima. El avance de la industrialización del azúcar profundizó la división del trabajo, separando la fase agrícola de la fabril, lo que generó un poderoso grupo de industriales, un importante sector de pequeños y medianos productores (que proveían la materia prima a los ingenios) y un ejército de

jornaleros que vendrían a suplir la ausencia de mecanización de la siembra y la cosecha de la caña.

La composición y dinámica de este universo laboral fue modelada por el periódico ritmo de la zafra. En tal sentido, el conjunto obrero se escindió en dos: los obreros permanentes y los temporarios, quienes se dedicaban a cortar, pelar y cargar la caña. Por otra parte, en el extremo superior de la pirámide laboral se ubicaban los empelados jerárquicos, técnicos y administrativos. Asimismo, la producción textil (costureras) siguió ocupando un contingente laboral especialmente femenino, cuyas posibilidades de vincularse con el mercado de trabajo eran restringidas. Hacia 1914 aumentaron las ocupaciones vinculadas con el transporte, la expansión del Estado y, en menor medida, las profesiones liberales; mientras que el número de jornaleros y peones sin ocupación específica representaba el 50% del mercado de trabajo masculino de Tucumán.

Recién a finales del siglo XIX, el avance de la proletarización, el notable incremento de la masa laboral asalariada bajo precarias condiciones de vida y de trabajo y la influencia del anarquismo y el socialismo promovieron –primero en la capital pero progresivamente en los departamentos sobre todo en los azucareros– respuestas colectivas como el mutualismo o el asociacionismo de resistencia, que posibilitaron la organización de los trabajadores y sus primeras conquistas laborales. De esta forma, entre fines del siglo XIX y principios del XX, los trabajadores protagonizaron diversas protestas que contribuyeron a la vinculación y definición de sus intereses y, por ende, a la conformación de su identidad de clase. Por su parte, el Estado provincial, la prensa y algunas asociaciones culturales expresaron su preocupación por la emergente “cuestión social”, que fue abordada desde diferentes perspectivas y propuestas de acción, entre las que se destacó el cuestionamiento a la ley de conchabo. Su derogación en 1896 posibilitó el avance de un mercado de trabajo libre y unificado, rasgo definitorio del capitalismo.

En ese convulsionado fin de siglo la clase trabajadora se convirtió en un actor social que ganó en presencia y visibilidad pública. La lucha por mejorar sus condiciones laborales la llevó a declarar huelgas, tomar las calles, participar en movilizaciones y elevar petitorios a las autoridades. En este contexto, la agencia de los trabajadores y la creciente preocupación de los gobernantes por los problemas y la conflictividad social alentaron la conquista de derechos laborales, como el descanso dominical, la jornada laboral de ocho horas, la fijación de una ley de salario mínimo, la regulación del trabajo de mujeres y niños y la ley de accidentes de trabajo, entre otras.

Sin embargo, el avance de la legislación laboral y la intervención del Estado a través del Departamento Provincial de Trabajo, creado en 1917,

tuvieron que vencer múltiples resistencias, particularmente de los industriales azucareros. De esta forma, hasta mediados del siglo XX la conquista de derechos laborales fue un complejo proceso signado por las demandas y protestas de los trabajadores; la actitud renuente de los empresarios; los incumplimientos de la patronal frente a la legislación y la elaboración de múltiples proyectos laborales –especialmente de socialistas y radicales– muchos de los cuales no llegaron a convertirse en ley pero otorgaron relevancia a los problemas de la clase trabajadora y algunos, con el tiempo, fueron recuperados.

La contundencia de la transformación productiva impulsada por la agroindustria azucarera se reflejó en los altos porcentajes de su fuerza de trabajo que, hacia la década de 1930, alcanzaron alrededor del 90% del total provincial. Fuera de ese rubro, los oficios más numerosos eran los de la rama de la construcción, de la alimentación y las industrias dedicadas al vestido. En términos globales, en esa década, aproximadamente entre 80.000 y 100.000 trabajadores conformaban el mercado laboral de la provincia, cifra que incluye la llegada de miles de trabajadores temporarios durante la época de zafra. Al amparo de las políticas redistributivas, de estímulo industrial y de regulación estatal implementadas en las décadas del '40 y '50, la fuerza de trabajo tucumana siguió concentrada, en su amplia mayoría, en las diferentes ramas de actividad que se desplegaban a expensas de la producción azucarera.

En los años treinta, particularmente desde mediados de la década, los trabajadores urbanos tucumanos articularon diversas estrategias para defender y ampliar sus derechos laborales (mitin, huelgas pero también la búsqueda de mediadores –especialmente funcionarios de gobierno– para canalizar sus demandas). En tal sentido, en una coyuntura de repunte económico, el fortalecimiento de la organización sindical, la mayor recepción de los gobiernos radicales frente a las demandas obreras y el convencimiento sobre el rol que el Estado debía cumplir en la esfera laboral incidieron en el protagonismo de la clase trabajadora. Una expresión de esta situación fue el renovado proyecto de conformar una organización de segundo grado que, al reunir a diversos sindicatos, fortaleciera las reivindicaciones y la capacidad negociadora de los trabajadores, empresa concretada con la fundación de la Federación Provincial de Trabajadores en 1936. La vitalidad del movimiento obrero urbano contrastó con la debilidad e intermitencia de la organización laboral azucarera. La imposibilidad de fundar sindicatos en la veintena de ingenios, espacios marcados por la resistencia de la patronal y la débil presencia de las agencias estatales, debilitó las demandas y postergó el anhelo de unidad gremial. Sin embargo, en este adverso contexto merece destacarse, en 1936, la creación de la Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera (UGTIA) que, vinculada al socialismo, se propuso reunir a los sindicatos de los ingenios. Esta

situación se reversionó en 1944 con la multiplicación de sindicatos de base y la creación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) convertida en el gremio más importante del norte argentino.

Durante el primer peronismo, el avance de derechos y el mayor control de la normativa laboral, a través de la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, particularmente, en la postergada esfera laboral azucarera fue sustancial: aguinaldo, feriados y vacaciones pagas, salario familiar e incrementos salariales en función de la antigüedad redimensionaron el mundo del trabajo. Por su parte, el ritmo de la protesta obrera fue modelado por la estructura descentralizada de FOTIA y la facultad de los sindicatos para declarar medidas de fuerza. En este contexto, se destacaron las huelgas para incidir en la remoción de la jerarquía fabril o los procesos laborales, demandas que expresaron la pretensión de los sindicatos de intervenir en una esfera de competencias, hasta ese momento, estrictamente patronal y revelaron la creciente fuerza del poder obrero.

La impugnación obrera a la autoridad empresarial en los ingenios también interpeló al gobierno peronista, obligado a contener los desbordes de la ofensiva obrera y precisar los “sentidos de los límites” que él mismo había alentado a cuestionar. De esta forma, se articuló un juego de tensiones y mutuos condicionamientos. El respaldo que el Estado brindó a los reclamos obreros se conjugó con llamados a la disciplina y la productividad y con la declaración de ilegalidad de medidas de fuerza, particularmente las vinculadas con las exigencias de despidos del personal jerárquico y administrativo de las fábricas. Un punto de inflexión en el sindicalismo azucarero llegó con la huelga de 1949 y la posterior intervención de FOTIA que se prolongó hasta 1955.

Entre el golpe de Estado de 1955 y la recuperación de la democracia en 1983 la clase trabajadora tucumana atravesó uno de los periodos más complejos y duros de su historia. Tuvo que sobreponerse a las recurrentes crisis económicas, resistir la decidida voluntad gubernamental de dismantelar el más importante aparato productivo provincial, el azucarero, y fue víctima desde 1975 –y a lo largo de la última dictadura militar– de las políticas represivas estatales. Frente a la decisión política de disminuir el poder de la clase trabajadora, la “resistencia” obrera como forma de expresar la disconformidad por el derrocamiento de Perón y defender las conquistas socio-laborales alcanzadas durante su gobierno se multiplicaron por ingenios, talleres ferroviarios, fábricas de cervezas, entre otros. Asimismo, las recurrentes e irresueltas crisis azucareras y el avance de medidas desregulatorias en pos de la “liberalización” del mercado y la mayor eficiencia productiva se hicieron presentes desde 1955, se agudizaron en 1959 y en 1966 alcanzaron su expresión más contundente y, por ende, sus consecuencias más drásticas.

En esa última fecha, el cierre de once de los 27 ingenios fue una dramática experiencia en la que convergieron resistencias, movilizaciones y puebladas destinadas a defender la fuente de trabajo, pero también sensibles a procesos migratorios que mermaron demográficamente a la provincia. Sin embargo, la lucha sindical no cesó a pesar de los golpes recibidos durante el gobierno de facto de Onganía. La clase obrera tucumana protagonizó una de las experiencias de oposición más tempranas a la dictadura, al enfrentar el cierre de los ingenios con acciones de defensa como la ocupación de las fábricas, las ollas populares, los paros azucareros, las marchas y el desafío a las fuerzas represivas militares y policiales. El protagonismo de la clase obrera y su confluencia con otros sectores populares combinó en Tucumán las luchas iniciales de los trabajadores azucareros por la reapertura de los ingenios, con el movimiento social más amplio de oposición a la dictadura que eclosionó, especialmente, en la ciudad capital y que aglutinó tanto a contingentes obreros –inclusive los ferroviarios de Tafí Viejo– con trabajadores asalariados estatales y el movimiento estudiantil universitario. Aunque la resistencia del pueblo tucumano –organizado en “comisiones de defensa” a lo largo y ancho de la provincia– no pudo, en un contexto de retroceso y con sólo sus fuerzas, torcer el brazo a la dictadura recién instalada en el poder, obtuvo algunas conquistas nada despreciables como salvar del cierre a cinco ingenios, con los que la dictadura militar creó la empresa estatal CONASA.

En Tucumán, a partir de 1975 el “Operativo Independencia” implicó otro duro golpe a la clase trabajadora, la principal víctima del poder represivo del Estado. Por lo tanto, cuando sobrevino el golpe de marzo de 1976 la represión ya estaba instalada. La dictadura prolongó las torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones sobre la clase trabajadora que, desde hacía más de una década, resistía las políticas de desmantelamiento del aparato productivo y sus profundas consecuencias sociales. En tal sentido, esta violenta represión se conjugó con la intervención de sindicatos y federaciones, situación que desarticuló, en gran medida, las movilizaciones sindicales y de las bases, particularmente, hasta 1979. Sin embargo, la persistencia de estrategias de resistencia subterráneas y fragmentarias de los trabajadores, muchas de las cuales recuperaron las prácticas de la “resistencia peronista” y se expresaron en forma de sabotajes o trabajo a desgano esperan ser recuperadas a fin de contar con una mirada compleja del mundo del trabajo provincial.

Pasado el duro golpe que significó para la economía y la clase trabajadora tucumana el cierre de los ingenios y la dictadura militar, el retorno de la democracia prometía recomponer el mercado laboral tucumano. Si bien con profundos cambios respecto de las décadas anteriores, los puestos de trabajo siguieron dependiendo principalmente de la agroindustria azucarera y, paulatinamente, se consolidaron dos nuevos sectores demandantes de mano

de obra: el sector citrícola y el sector público. Las políticas implementadas desde el Estado nacional y provincial produjeron, durante la década de 1980, profundos cambios en la estructura ocupacional. El retroceso protagonizado por la actividad azucarera y, por ende, la disminución de la mano de obra empleada en la misma, no pudo ser amortiguado por el avance del sector citrícola y la incorporación creciente de empleados en el sector público.

La década de 1990 supuso cambios importantes en el mercado laboral. Las políticas de ajuste llevadas adelante por el gobierno nacional profundizaron tendencias que venían perfilándose desde las décadas de 1970 y 1980 y, a diferencia de lo que sucedió en los '80, el gobierno provincial no tuvo herramientas para contener el deterioro económico y social. Las tradicionales actividades económicas de la provincia vieron reducido el personal empleado entre 1991 y 2001. La caída de la población ocupada en el sector agrícola y en el sector industrial fueron, por lejos, las más importantes del período, ambas alcanzaron una reducción del 30%; mientras que los sectores que incrementaron sus empleados muestran claramente cuáles eran los objetivos de las políticas económicas de la década del '90: el crecimiento de las ramas de finanzas y seguros.

Frente al empeoramiento continuo de las condiciones de trabajo, el Estado articuló tibias formas de protección de los trabajadores (a través de la regulación de algunas de las actividades económicas); sin embargo, el retroceso económico se manifestó de igual manera y las consecuencias sobre el mercado de trabajo, en definitiva, fueron negativas. A pesar del incremento en el desempleo, durante estos años la demanda clave fue el salario, como lo expresaban las protestas de los trabajadores que reclamaban por su poder adquisitivo ante un contexto de inflación creciente. En los '90 la dinámica económica de ajuste y desregulación se profundizó y, con ella, las consecuencias sobre el mercado de trabajo provincial, acentuándose el empeoramiento de las condiciones laborales que había comenzado en la década anterior. La apertura comercial, combinada con el total retiro de las regulaciones estatales, socavó la situación de los trabajadores y la provincia experimentó, durante esta década, altos niveles de desempleo, subocupación, sobreempleo e informalidad. De allí que el eje del conflicto laboral en esta década se centrara en las políticas del Estado y la pérdida de los derechos laborales y no en las demandas por el poder adquisitivo, como había sucedido en los '80.

En suma, el esfuerzo de síntesis condensado en estas páginas procuró recuperar la particular experiencia de los trabajadores tucumanos en la larga duración. De este modo, intentamos acercar al lector la voz de los protagonistas y darle visibilidad a sus rostros que por mucho tiempo estuvieron

acallados y desdibujados en una historiografía que privilegió otro tipo de miradas. Esperamos que este libro contribuya a alentar nuevas investigaciones que enriquezcan y complejicen las lecturas sobre el mundo del trabajo, sus actores, sus formas de protesta y su sinuoso recorrido en la búsqueda de derechos.